

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LAS ISLAS BALEARES (pp. 1-
21)**

—

DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A LES ILLES BALEARS (pp. 22-41)

JOSÉ MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ

Departament d'Urbanisme i Territori. Consell Insular de Mallorca

—

Consultor

Universitat Oberta de Catalunya

Sumario: 1. Introducción. 2. Actividad legislativa. 2.1. Se aprueba la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, Agraria de las Illes Balears. 2.2. El Decreto Ley 1/2015, que aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. 2.3. Se aprueba el reglamento insular de desarrollo de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo por Mallorca. 3. Políticas sobre patrimonio natural. 3.1. Se aprueba el Plan Forestal de las Illes Balears. 3.2. Se aprueba el IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales. 3.3. Red Natura 2000. A. Aprobación de nuevos planes de gestión. B. Declaración de nuevas zonas especiales de conservación. 3.4. En tramitación el nuevo PRUG del Parque Nacional de Cabrera. 4. Política energética. 4.1. Modificación del Plan Director Sectorial Energético. 4.2. Todavía más sobre las polémicas prospecciones submarinas. 4.3. Menorca y la energía eólica. 5. Otras noticias ambientales. 5.1. Nueva delimitación del dominio público marítimo de Formentera. 5.2. Proyecto de Reserva Marina en la Sierra de Tramuntana. 5.3. Ecología y turismo. A. La apuesta por el turismo ciclista no estacional. B. Más sobre el modelo turístico y el impacto territorial: el PRI de la playa de Palma. 5.4. Sobre proyectos de recuperación de fauna.

1. Introducción

La legislatura a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares está llegando al final del trayecto y ahora puede ser un buen momento para hacer balance. De entrada, hay que reconocer que estos cuatro años han venido marcados por la crisis económica, una circunstancia que ha condicionado la política ambiental por encima de otros ámbitos. Es cierto que los recortes han afectado a sectores muy sensibles como la sanidad o la educación, pero también es una realidad el hecho de que, con la excusa de la crisis, se han relajado —o directamente suprimido— las políticas ambientales: la necesidad de generar a todo precio una actividad económica que redujera el efecto de esta situación económica extraordinariamente negativa ha sido aprovechada por el sector conservador —que no conservacionista— para liberarse de determinadas cargas derivadas de los controles administrativos en defensa del medio ambiente. Así, las modificaciones normativas y las nuevas leyes generadas a lo largo de los cuatro años se han dirigido a incentivar al máximo las iniciativas empresariales sobre la base de permitir lesiones ambientales que unos años atrás habrían supuesto una barrera infranqueable.

No valoraremos si estas políticas han servido o no para salir de la crisis, puesto que lo que dice la experiencia es que las medidas legislativas estructurales tardan tiempo en dar resultados, por lo que no sirven en contextos coyunturales. Es muy improbable que la flexibilidad introducida en la legislación turística tenga efectos directos sobre la coyuntura económica a corto plazo —para esto existen las medidas extraordinarias, urgentes y transitorias—, pero implanta regímenes basados en las excepciones que impactan sobre el entorno y sobre los recursos naturales; por otro lado, la experiencia también apunta al hecho de que de las crisis se sale cuando estas finalizan, sin que las políticas subregionales puedan influir realmente en su evolución. En un mundo globalizado con economías interdependientes, provoca un mayor impacto en el mercado

turístico de las Islas Baleares la inestabilidad en los mercados emergentes de la región del Magreb que todas las medidas de maquillaje en clave autonómica que se puedan adoptar.

No obstante, la legislatura ha aportado a nuestro derecho leyes importantes como la de turismo, la de ordenación y uso del suelo, la agraria, la de minas o la de comercio, con medidas que tienen impactos directos e indirectos sobre la calidad de nuestro entorno. Igualmente, esta legislatura se ha caracterizado por una reducción o simplificación de los controles de impacto ambiental y de sostenibilidad ambiental. Las facilidades a los promotores hoteleros, a los infractores urbanísticos, a los impulsores de grandes centros comerciales y a los empresarios de actividades extractivas —por citar unos ejemplos— han marcado algunos de los ejes más polémicos de las leyes mencionadas. También las facilidades para impulsar actividades complementarias en el campo, con la finalidad de evitar el abandono de la producción agrícola, pueden tener repercusiones importantes en el entorno, si bien se enmarcan en una lógica destinada a impedir que desaparezca el sector primario.

Las notas positivas derivarían de la aprobación de la nueva planificación forestal o de la delimitación y ampliación de zonas de conservación especial derivadas de la implantación de la red ecológica europea Natura 2000. También se puede destacar la introducción de las energías renovables en el plan director sectorial energético o la creación de nuevas reservas marinas.

En el lado opuesto se sitúan iniciativas de protección que en realidad suponen una minoración de los criterios ambientales, como las previsiones del nuevo PRUG del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera o el modelo frustrado de reconversión de la playa de Palma, que no responde a las expectativas iniciales o a los planteamientos embrionarios previstos en los inicios de todo el proceso de reconversión integral de esta zona turística madura.

Con respecto a las políticas energéticas, hay que apuntar que las iniciativas privadas que quieren abrirse camino encuentran muchas dificultades, y eso es así por las directrices implantadas desde la Administración general del Estado y del Gobierno de Madrid. Hará falta un giro copernicano para conseguir que las renovables encuentren el camino en nuestras islas, donde las condiciones climáticas son idóneas para su arraigo con éxito.

Según las encuestas, los resultados de las elecciones autonómicas y locales parece que apuntarán hacia un nuevo rumbo con respecto a las políticas ambientales, pero este análisis se deberá hacer en el próximo número de la RCDA y a la vista de la conformación de los nuevos gobiernos. Así que, de momento, los temas apuntados —y algunos otros más— son los que podremos examinar con más amplitud en los apartados siguientes.

2. Actividad legislativa

2.1. Se aprueba la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, Agraria de las Illes Balears

El Pleno del Parlamento aprobó el martes 2 de diciembre la Ley Agraria de las Illes Balears con la intención de ordenar en un único texto los sectores agrícola, ganadero, forestal y agroalimentario, así como el desarrollo rural de las Islas Baleares, un sector que hace décadas que pierde peso específico en el PIB del archipiélago. La exposición de motivos de la Ley argumenta que la normativa propuesta venía siendo reclamada por el sector desde hacía más de 30 años. Uno de los objetivos que se propone el texto legal es hacer rentable la actividad agraria de forma que los campesinos puedan mantener sus explotaciones y que se detenga así el abandono progresivo del campo isleño.

Con respecto a la elaboración y tramitación de la nueva Ley, en la ponencia en sede parlamentaria se afirmó que esta surge del consenso con el sector y de las aportaciones hechas por administraciones y organismos, y también por la sociedad civil, durante el proceso de participación que empezó el pasado mes de marzo de 2014. Una vez cerrado el texto con las mejoras introducidas en las mesas sectoriales realizadas, el Consell de Govern de la Comunidad Autónoma aprobó el 12 de septiembre de 2014 el Proyecto mencionado. Posteriormente, este superó, durante la sesión plenaria celebrada el 4 de noviembre, el debate de enmiendas a la totalidad, continuando la tramitación hasta el debate y la votación final.

Entre los principios y objetivos que podemos encontrar en el articulado, destacan los siguientes: resolver los problemas de la agricultura balear, fomentar la inversión y el empleo en el sector primario, revalorizar el patrimonio rural y facilitar la gestión activa del territorio y del medio ambiente a partir de la actividad agraria.

Uno de los aspectos más polémicos —y criticado por el sector conservacionista— es el hecho de que esta ley abre las puertas al desarrollo de actividades complementarias

agroturísticas de diversificación de la actividad agraria y regula la venta directa de productos en las mismas explotaciones; con eso, la Ley promueve la supervivencia del sector, pero a costa de perder peso como actividad primaria derivando la rentabilidad a la obtención de rentas del sector terciario —turismo y comercio—. También destaca la consideración del sector forestal como una actividad agraria, con especial atención al impulso de su gestión y en busca de un valor de mercado de los aprovechamientos forestales, principalmente la biomasa, con la finalidad de generar economía y empleo, mantener los ecosistemas y prevenir los incendios forestales. Esta *vis atractiva* de la Ley también ha sufrido críticas dado que se inmiscuye en un ámbito sectorial con sustantividad propia como es el forestal.

En principio, y de acuerdo con lo que se desprende de la exposición de motivos, la Ley aprobada da facilidades para el inicio y el desarrollo de la actividad agraria y la complementaria, que quedan reconocidas como uso admitido en el medio rural y no estarán sometidas a la declaración de interés general; ello, con respecto a las actividades complementarias, implica la modificación de la matriz de usos en suelo rústico regulada en la legislación de ordenación territorial —más concretamente en las Directrices de Ordenación Territorial (DOT)—, lo que implica una nueva alteración del régimen sustantivo mediante una ley sectorial, que no es el lugar adecuado para alterar este régimen. Por otro lado, la Ley posibilita el cambio de uso en edificios existentes para llevar a cabo actividades complementarias de diversificación agraria o instalar agroindustrias de transformación de la producción propia, contraviniendo la tradición de prohibición de implantación del sector industrial en el suelo no urbano ni urbanizable; de esta manera, el suelo rústico pierde la condición básica de destinación conforme a su naturaleza y destino, en clara vulneración de la legislación básica estatal del suelo, que establece:

Artículo 7. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo.

1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.
2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del

régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.

Lo que implica el hecho de que una legislación agraria desplaza —y, a mi parecer, vulnera— las previsiones de la legislación básica estatal en materia de delimitación del estatuto del suelo. Igualmente, la legislación estatal también afirma —contradiendo la legislación autonómica que ahora comentamos— que el derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación de este conforme al estado, clasificación, características objetivas y destinación que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable en razón de las características y situación del bien. Y el artículo 8.2 del texto básico estatal afirma:

2. En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 12.2,a), las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

Implantar industrias en suelo rústico no parece que derive de la fijación de límites, sino de su levantamiento; igualmente, la perversión de la implantación de agroturismos en ausencia de actividad agrícola real rompe con la tradición de implantación de actividades complementarias para invertir los términos y promover actividades principales ajenas a la naturaleza y el destino normal del suelo rústico.

Al margen de lo anterior, la Ley —con relación al hecho diferencial insular— exige al Estado y a la Unión Europea el reconocimiento de este hecho y la necesidad de recompensar los inconvenientes que representa para el sector el aislamiento. La Ley también regula la obligación del Govern de consignar presupuestariamente las dotaciones económicas necesarias para garantizar la cofinanciación de las líneas de ayuda del sector que se vayan implantando.

Los aspectos positivos, si es que los hay, quizá sean, por una parte, la declaración de buena voluntad de fomentar la incorporación de los jóvenes y las mujeres en el sector, y, por otra, el impulso de la producción local y las marcas de calidad, el régimen de declaración de zonas catastróficas, la creación de la Estrategia Balear de Mejora del Conocimiento Agrario —con el objetivo de mejorar el conocimiento agrario y

agroalimentario de las Islas Baleares— o la regulación, por primera vez, de la producción, el almacenamiento y la gestión del estiércol.

Con respecto a la estructura formal, tenemos que destacar que se trata de una ley extensa que contiene 179 artículos, divididos en un título preliminar, diez títulos temáticos, cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, nueve disposiciones finales y un anexo; la intención del legislador ha sido crear un texto aglutinador del régimen de ordenación de casi toda la problemática del campo de las islas.

Finalmente, y como complemento al análisis de la Ley Agraria, el Govern ha empezado a elaborar y tramitar los decretos para regular el registro de explotaciones agrarias, la venta directa y el catálogo de alimentos tradicionales, en desarrollo del nuevo texto legal.

Igualmente, en la misma línea, el Consell de Govern acordó destinar 16,3 millones de euros para garantizar la cofinanciación anual de las ayudas agroambientales incluidas en el nuevo Plan de Desarrollo Rural de las Islas Baleares para el período 2015-2020, subvenciones que se podrán solicitar al FOGAIBA a partir del 1 de marzo y hasta el 15 de mayo de cada ejercicio económico.

2.2. El Decreto Ley 1/2015, que aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica

Las Islas Baleares arrastran un considerable retraso con respecto a la adaptación a las previsiones de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. La revisión del Plan Hidrológico de las Islas Baleares también lleva un retraso considerable; de hecho, en el anterior número de la RCDA ya dábamos cuenta del hecho de que el nuevo Plan Hidrológico de las Islas Baleares había iniciado la tramitación ambiental y de que, de acuerdo con la disposición adicional duodécima del texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio), iniciaba un período de consultas.

El Plan sigue con la tramitación, y, de hecho, a finales de abril se completaba el período de consultas mencionado. Mientras tanto, se ha decidido aprobar el Decreto Ley 1/2015, de 10 de abril, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica para la

demarcación hidrográfica intracomunitaria de las Illes Balears¹. La Diputación Permanente del Parlamento de las Islas Baleares, en la sesión del día 22 de abril de 2015, después de un debate y de una votación de totalidad, acordó validar el Decreto Ley 1/2015, de 10 de abril, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica para la demarcación hidrográfica intracomunitaria de las Illes Balears; esta resolución fue publicada en el BOIB núm. 066, de 2015.

Así, la exposición de motivos del Decreto Ley reconoce que la promulgación de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, comportó un cambio fundamental en la gestión y la planificación de las aguas en los países de la Unión Europea. El objetivo de esta directiva es establecer un marco completo de protección para toda el agua comunitaria. Como parte de este objetivo se tiene que destacar el esfuerzo de todos los Estados miembros para conseguir, para el 2015, un buen estado —ecológico, químico y cuantitativo— de las aguas, ya sean interiores, superficiales, subterráneas, de transposición o costeras.

Con todo, en otro apartado, la justificación del Decreto Ley afirma que del estudio de la diversidad de objetivos que plantea la Directiva 2000/60/CE se deducen la complejidad y la extensión que plantea incorporarla a los derechos nacionales de los Estados miembros, dado que establece disposiciones que afectan a diversos aspectos del agua, tanto técnicos como administrativos, lo que exige que se adopten medidas diversas que se tienen que plasmar necesariamente en disposiciones jurídicas de rangos normativos distintos. Por todo ello, la transposición de la Directiva Marco y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de ella han comportado un esfuerzo importante, especialmente en España, donde los asuntos relacionados con el agua tienen repercusiones económicas, sociales y políticas importantes.

Si bien es cierto todo lo anterior, sorprende el hecho de que, con el Parlamento disuelto y con una convocatoria de elecciones a la vista, se apruebe ahora con carácter de urgencia, por la vía de un decreto ley, este régimen de planificación hidrológica para la demarcación hidrográfica intracomunitaria de las Islas Baleares como un parche que intenta enmendar la carencia y el retraso en la tramitación del verdadero Plan Hidrológico. Esta disposición de rango legal se aprueba con la denominación de

¹ BOIB, núm. 052 de 2015.

Instrucción de Planificación Hidrológica para la demarcación hidrográfica intracomunitaria de las Illes Balears, en transposición de la mencionada Directiva 2000/60/CE.

Así, el objeto de esta instrucción es establecer los criterios técnicos para la sistematización de los trabajos de elaboración de los planes hidrológicos de la demarcación intracomunitaria de las Islas Baleares, de acuerdo con lo que establece el artículo 82 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio; examinado con detenimiento, es un intento de demostrar que se trabaja en la redacción del Plan Hidrológico con la finalidad de eludir las responsabilidades del incumplimiento de los plazos y el contenido de la Directiva.

2.3. Se aprueba el reglamento insular de desarrollo de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo por Mallorca

Como ya señalamos en una edición anterior de la RCDA, ahora hace poco más de un año se aprobó la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo (LOUS), cuya disposición final segunda preveía un régimen de autorización a los consejos insulares para desarrollar reglamentariamente, total o parcialmente, esta ley, y también para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias destinadas a cumplir las remisiones que esta ley hace a normas de este carácter.

Por ahora, el único organismo que ha culminado las tareas de elaboración y aprobación definitiva del desarrollo reglamentario ha sido el Consell Insular de Mallorca, que ha optado por la titánica tarea de elaborar un único texto de desarrollo que sustituye los reglamentos clásicos de planeamiento, gestión y disciplina urbanística, además de muchas otras disposiciones administrativas de carácter normativo desarrolladas a lo largo de los últimos cuarenta años.

Así, el Pleno del Consell Insular de Mallorca, en sesión de fecha 16 de abril de 2015, aprobó definitivamente el texto del Reglamento general de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo, para la isla de Mallorca, publicado en el BOIB, núm. 066, de 30 de abril de 2015.

Este extensísimo reglamento, que cuenta con 459 artículos, cinco disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias y tres disposiciones finales, entró en vigor el 30 de mayo de 2015.

Uno de los retos del mencionado Reglamento es el de solventar algunas de las incógnitas y previsiones mal resueltas en el texto de la Ley; otro de los objetivos es el de sistematizar la normativa reglamentaria acumulada durante los años en que estuvo en vigor la Ley de 1975 y su texto refundido de 1976, cuyo desarrollo reglamentario fue modificado numerosas veces a lo largo del tiempo. Igualmente, había que integrar toda la normativa autonómica de rango reglamentario y aquellos vacíos que, sin estar sometidos a la obligatoriedad de remitirse a un texto de rango legal, han sido olvidados por la LOUS. También vemos que el Reglamento desarrolla los preceptos de la Ley que lo requieren, teniendo en cuenta que en algunos casos este desarrollo resulta innecesario dado el grado de detalle con que la Ley de Ordenación y Uso del Suelo regula determinadas materias; se da así cumplimiento a la previsión de disponer en un mismo texto reglamentario las dos habilitaciones previstas en la disposición final segunda de la LOUS.

Un examen a esta extensa disposición reglamentaria nos permite comprobar que el grado de sistematización alcanzado es bastante satisfactorio, especialmente si nos atenemos al hecho de que tiene que desarrollar una ley llena de previsiones controvertidas, algunas contradicciones internas y otros artículos que —sencillamente— no se llegan a comprender.

Este reglamento de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo de la isla de Mallorca se estructura de manera muy similar a la LOUS, respetando asimismo los ámbitos de potestad reglamentaria normativa del Govern de les Illes Balears en las materias que, en atención al carácter suprainular inherente y en los términos que indica el apartado 4 del artículo 15 de la Ley, se han especificado de manera expresa en sus preceptos, así como en el apartado 2 de la disposición final segunda.

Habrá que esperar ahora la posibilidad de que un hipotético nuevo gobierno quiera modificar la LOUS para eliminar aquellos elementos más polémicos y controvertidos, lo cual puede implicar, a su vez, tener que modificar consiguientemente el Reglamento ahora aprobado.

3. Políticas sobre patrimonio natural

3.1. Se aprueba el Plan Forestal de las Illes Balears

En fecha 20 de marzo de 2015 se aprobaba el Decreto 11/2015. Con este acuerdo del Consell de Govern de les Illes Balears se daba conformidad al Plan Forestal de las Illes Balears (2015-2035).

El Plan Forestal de las Illes Balears se concibe como un documento que tiene que servir de referencia para la política forestal de la Comunidad Autónoma para los próximos veinte años. De esta manera, las Islas Baleares dejan de ser la única comunidad autónoma de todo el Estado español sin plan forestal propio para conservar y gestionar los bosques. El documento aprobado es fruto de un proceso de participación social que se inició en noviembre de 2012 y en el que han participado más de 375 instituciones y ciudadanos a lo largo de diez sesiones colectivas de trabajo y veinticuatro reuniones con especialistas ambientales y gestores forestales. El Plan también se ha sometido a la correspondiente evaluación ambiental estratégica en aplicación de la Ley 11/2006.

El Plan Forestal, que establece una estrategia para afrontar de manera participada y consensuada los retos que presenta la futura gestión de los bosques y las superficies forestales de las Islas Baleares, prevé una vigencia de veintiún años, por comprender los tres próximos períodos financieros de la Unión Europea (2015-2020, 2021-2028 y 2029-2035). Durante el primer período (2015-2020), el Plan establece una previsión presupuestaria de 185 millones de euros a partir de la financiación pública (europea, nacional y autonómica) que actualmente se aplica a actuaciones en materia forestal.

El Plan comprende todo el ámbito forestal de las Islas Baleares, constituido por más de 222.000 hectáreas de superficie forestal, el 44% del territorio insular. Además, por primera vez se estudia detalladamente la estructura de la propiedad forestal de la Comunidad Autónoma, con 20.086 propiedades forestales y 19.019 propiedades agroforestales, de las cuales resulta una media de cinco hectáreas por explotación forestal y once hectáreas por explotación agroforestal.

El documento aprobado se centra en la reactivación y la reorganización del sector forestal como motor del desarrollo de las comarcas rurales, la generación de servicios ambientales, la implantación de nuevas iniciativas de economía verde y la puesta en valor de los productos forestales. Además, propone la creación de un comité forestal

como órgano de coordinación de la política forestal con representación del sector, de las administraciones y de la sociedad civil.

Para alcanzar estos objetivos generales, el Plan se vertebra en cinco ejes de intervención, donde se encuadran los 18 retos a los que se pretende dar una respuesta eficaz durante el período de vigencia a través de la ejecución de un total de 98 medidas específicas e iniciativas concretas, que se definen con detalle.

También se prevé que, en el plazo de seis meses tras la finalización del primer período de vigencia (2015-2020), el Govern deberá elaborar un informe de evaluación, revisión y justificación del grado de cumplimiento del Plan.

Con este plan, que se complementa con los inventarios realizados y los planes de emergencias en materia forestal, se completa el panorama de la ordenación integral de los bosques de las islas.

3.2. Se aprueba el IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales

Por otro lado, con pocos días de diferencia, el Consell de Govern de la Comunidad Autónoma aprobó el Decreto 22/2015, de 17 de abril, por el que se aprueba el IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales de las Illes Balears (2015-2024), que, con una vigencia de diez años, incide en la prevención especialmente en zonas urbano-forestales, potencia la corresponsabilidad e incorpora las nuevas tecnologías en los operativos de extinción ante las contingencias del fuego en las zonas rurales agrícolas y boscosas.

Igualmente, y con relación al instrumento de defensa contra los incendios forestales, el Govern y la Fundación Natura Parc renovaron el acuerdo de colaboración para la prevención de incendios mediante el uso de pastoreo con ganado equino recuperado. La iniciativa se corresponde con una de las medidas previstas en el Plan de Prevención de Incendios Forestales en la Sierra de Tramuntana y que ya fue puesta en marcha el verano pasado con un presupuesto de 2,1 millones de euros.

Los aspectos más destacados del IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales de las Illes Balears para el período 2015-2024 son la incidencia en la necesidad de la autoprotección de las viviendas en las zonas urbano-forestales, la potenciación de las inversiones en materia de prevención y la aplicación de las nuevas

tecnologías en los operativos de extinción. El Plan, que integra todas las aportaciones del extenso e intenso proceso de participación social establecido para la elaboración del Plan Forestal de las Illes Balears, aprobado recientemente, fija una programación estratégica para los diez próximos años con el objetivo general de disminuir la incidencia de los incendios (número, frecuencia, gravedad, superficie quemada, etc.) en el territorio de las Islas Baleares.

Igualmente, el IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales de las Illes Balears se enmarca en una realidad en la cual se prevé que habrá incendios cada vez más extensos, intensos y peligrosos. Por eso, establece una planificación de actuaciones que se tienen que llevar a cabo en tres fases: actuaciones urgentes (1-2 años); actuaciones a corto plazo (3-6 años); y actuaciones a medio plazo (7-10 años). Cuenta con una estimación presupuestaria de 70 millones de euros, que se financiarán a través de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y de los fondos europeos del Plan de Desarrollo Rural.

Así, según datos recogidos en el documento, el nuevo Plan establece un mapa de alto riesgo de incendios por zonas, del que se desprende que el 36,2% de la superficie total del archipiélago y el 81,3% de la superficie forestal se deben considerar como zonas de alto riesgo. De estas, la concentración mayor se sitúa en Ibiza, donde la mitad de la superficie total (49,8%) y casi la totalidad de la superficie forestal (96,5%) corresponden a esta categoría. Le sigue de cerca Menorca, con el 45,8% y el 86,8% de las superficies total y forestal, respectivamente; a continuación, Mallorca, que presenta un 32,4% y un 77,7% de zonas de alto riesgo respecto de las superficies total y forestal; y, finalmente, Formentera, donde las zonas de alto riesgo ocupan el 29,6% del territorio y el 56,6% de la superficie forestal.

3.3. Red Natura 2000

A. Aprobación de nuevos planes de gestión

El Consell de Govern de la Comunidad Autónoma adoptó el Decreto 14/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueban cinco planes de gestión de determinados espacios protegidos por la red ecológica europea Natura 2000 en las Islas Baleares. Estos planes de gestión afectan a los ámbitos siguientes: Cuevas, Balsas Temporales, Albuferas de Mallorca, Mondragó y Es Trenc-Salobrar de Campos. Estos cinco planes incluyen la

gestión de 46 lugares de importancia comunitaria (LIC) de Mallorca, Menorca y Formentera, los cuales, por esta vía, se han declarado zona especial de conservación (ZEC), cumpliendo así con las directivas europeas y las normativas estatales en materia de protección de espacios naturales.

Según se desprende de la memoria que acompaña al Decreto, estos nuevos planes de gestión son fruto de los acuerdos adoptados por medio del proceso de participación pública llevado a cabo en los últimos dos años y que ha contado con la implicación de 1.123 personas, de unas 300 asociaciones y de entidades de carácter social, cultural, económico y ambiental, así como de todas las administraciones públicas afectadas. A lo largo de este proceso, 21 organizaciones, administraciones y particulares han presentado alegaciones o han informado los cinco planes de gestión aprobados. La memoria menciona que el 60% de las aportaciones han sido incorporadas a los documentos definitivos.

Los planes de gestión Natura 2000 aprobados se estructuran de la siguiente forma: una primera parte de diagnóstico donde se describen los hábitats y las especies de interés comunitario; una segunda en que se contemplan los objetivos y las medidas para garantizar su conservación; y una tercera donde se detallan las actuaciones de seguimiento del plan, las prioridades de las medidas y el presupuesto previsto para ejecutarlas.

Los cinco planes aprobados regulan la gestión de una superficie total de unas 8.000 hectáreas de especial conservación. De forma individual, el de Cuevas incluye 30 cavidades declaradas ZEC, con una superficie de 2.898 hectáreas de la isla de Mallorca; el de Balsas Temporales hace referencia a 12 ZEC, con una superficie de 331,8 hectáreas entre Mallorca, Menorca y Formentera; el de las Albuferas de Mallorca se ocupa de las dos ZEC que forman parte del Parque Natural de s'Albufera y de la Reserva Natural de s'Albufereta, con un total de 2.593 hectáreas; el de Mondragó incluye la gestión de una ZEC, dentro del Parque Natural, con una extensión de 780 hectáreas; y, finalmente, el de Es Trenc-Salobrar de Campos gestiona una ZEC que ocupa una superficie de 1.452 hectáreas. Los planes se revisarán cada seis años y para el primer período cuentan con un presupuesto global de 1.262.000 euros.

Además de estos cinco planes de gestión, el Govern de la CAIB está trabajando en la elaboración de 20 planes de gestión más que recogerán las 91 zonas ZEC restantes. En total, las Islas Baleares contarán con 25 planes, que incluirán la gestión de 137 ZEC, los

cuales se prevé que se vayan aprobando progresivamente, como veremos en el apartado siguiente.

B. Declaración de nuevas zonas especiales de conservación

Recientemente se ha dado luz verde a la declaración de nuevas zonas especiales de conservación, con el acuerdo de la Comisión de Coordinación de Política Territorial, que ha informado favorablemente la declaración como ZEC de los lugares de importancia comunitaria (LIC) correspondientes a la Sierra de Tramuntana, Ses Salines de Ibiza y Formentera y el archipiélago de Cabrera como paso previo a su aprobación definitiva por parte del ejecutivo balear.

Hay que recordar que el Govern de la CAIB está elaborando los planes de gestión de las zonas declaradas como LIC de la red ecológica europea Natura 2000 con el objeto de declararlas ZEC, cumpliendo así con las directivas europeas y la normativa básica estatal en materia de protección de espacios naturales. El Govern aprobó en su día los primeros cinco planes, que incluían la gestión de 46 LIC, tarea que continúa ahora con la tramitación del resto de planes, que agruparán las 91 zonas restantes. Entre estos planes se encuentran los tres informados favorablemente por la Comisión mencionada.

Los planes a los que nos referimos son: el de gestión de la Sierra de Tramuntana, que incluye 29 espacios, con una superficie total de 31.397,06 ha en la isla de Mallorca; el de gestión de Ses Salines de Ibiza y Formentera, que afecta a una superficie de 16.434,89 ha, de las cuales 13.476,61 (82%) son marinas; y el de gestión del archipiélago de Cabrera, que afecta a una superficie de 20.531,69 ha, de las cuales el 93% pertenece al ámbito marino.

Los documentos relativos a la declaración de ZEC y el contenido de los planes de gestión se pueden consultar en la página web <http://xarxanatura.es/pg-aprovats/>.

3.4. En tramitación el nuevo PRUG del Parque Nacional de Cabrera

El panorama relativo a la protección del medio natural lo completamos en esta crónica con la noticia de la tramitación de la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera. Así, el BOIB

número 66, de 30 de abril, publicaba el anuncio del trámite de información pública del procedimiento iniciado.

El Patronato del Parque Nacional, reunido el 20 de abril, informó favorablemente, por mayoría de los asistentes, la propuesta de nuevo PRUG, que contó con el voto en contra de las dos entidades conservacionistas presentes en el Patronato: Oceana y GOB. Por otro lado, el representante de los agentes del medio ambiente también votó en contra. Los dos representantes de las instituciones científicas —el Instituto Español de Oceanografía y la Universidad de las Islas Baleares— se abstuvieron.

Los motivos de los votos en contra y de las abstenciones mencionados se fundamentan en la apreciación de que el nuevo PRUG abre la puerta a una intensificación del uso público recreativo y, en cambio, no refuerza las políticas y las medidas de conservación. De hecho, la ampliación de zonas con actividad antrópica y el incremento de la presión humana admitida banalizan la finalidad de protección y de conservación del Parque Nacional, que ya se vio cuestionada en el momento de la apertura de un albergue en la isla, un lugar donde los recursos son escasos, falta agua, la energía se produce con combustibles fósiles y la generación de residuos plantea un grave problema.

Otro de los elementos de discrepancia se encuentra en la reiterada petición de ampliación del ámbito del Parque Nacional, que ha sido descartada por el actual equipo de gobierno a pesar de los estudios que avalan su conveniencia. Tampoco se amplían las zonas de reserva integral, no se plantea reducir el esfuerzo pesquero y no se establece un indicador de capacidad de carga máxima de personas para evitar las afectaciones negativas de la afluencia de visitantes, masificación que afecta a los valores naturales del espacio y a la percepción del visitante.

La crítica final se dirige a la concepción de los espacios naturales que ha demostrado el actual Gobierno de la CAIB, una concepción mercantilista y de rendimiento económico por encima de la finalidad ecológica de conservación. En los espacios protegidos de Baleares, las medidas de conservación del patrimonio natural (con investigación, seguimiento, mantenimiento, restauración, vigilancia, uso público educativo o naturalista...) han sido marginadas por alternativas de uso turístico, de ocio y deportivas que apuntan a la privatización de estos espacios.

4. Política energética

4.1. Modificación del Plan Director Sectorial Energético

La Comisión de Coordinación de Política Territorial de la CAIB informó favorablemente en abril la modificación del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, relativo a la ordenación territorial de las energías renovables. El objetivo de esta modificación es disponer de una planificación territorial que regule la aptitud del territorio para acoger instalaciones de energías renovables, haciendo especial énfasis en la regulación de las tecnologías maduras: fotovoltaica y eólica.

Después de este trámite, y al cierre de esta crónica, se ha publicado el Decreto 33/2015, de 15 de mayo, por el que se aprueba definitivamente la modificación del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears (BOIB, núm. 073, de 2015). En el preámbulo del Decreto se afirma que el modelo energético actual, basado en los combustibles fósiles, es la causa principal del fenómeno del cambio climático. El aumento de la temperatura media de la Tierra derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO₂ y otros pone en peligro la composición, la capacidad de recuperación y la productividad de los ecosistemas naturales, el desarrollo económico y social, y la salud y el bienestar de las personas.

Así, desde la base del reconocimiento del cambio climático, la nueva planificación asume que el único camino posible para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones fijados por las administraciones es el desarrollo de un modelo energético más sostenible, que tiene que estar marcado por la participación creciente de las energías renovables y por el desarrollo progresivo de un modelo de generación eléctrica distribuida en que la penetración progresiva del vehículo eléctrico debe tener un papel fundamental en el desarrollo de las redes energéticas inteligentes. Por otro lado, se reconoce el hecho objetivo de que en las Islas Baleares la participación de las energías renovables es insuficiente. Así, sobre el total de la producción eléctrica, la aportación de las energías renovables no llega al 3%. Este dato sitúa nuestra comunidad como una de las que menos penetración de energías renovables presenta.

Como se afirma en el documento aprobado, el objetivo último de este decreto es incrementar la producción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables en las Islas Baleares con el fin de cumplir las previsiones autonómicas, estatales y europeas con respecto a energías renovables y reducción de emisiones de CO₂. Por eso, la

normativa se centra en las tecnologías que hoy se consideran maduras y capaces de participar de forma significativa en el sistema de producción eléctrica: la fotovoltaica y la eólica. Otras tecnologías como la biomasa tendrán que ser objeto de una planificación específica en el momento oportuno.

4.2. Todavía más sobre las polémicas prospecciones submarinas

Como hemos señalado en otros números de la RCDA, el asunto de las prospecciones submarinas sigue siendo noticia en las Baleares y en las Islas Canarias, donde todavía planea la amenaza que comporta la búsqueda de combustibles fósiles en los fondos marinos que rodean el archipiélago. La controversia es máxima a causa de la gestión opaca realizada, donde no se acaba de discernir qué autorizaciones se han otorgado y qué prospecciones se realizan sin control, y por las afirmaciones contradictorias que se realizan en relación con el posicionamiento del Govern de las Islas.

Este tipo de prospecciones sísmicas llevan asociadas un gran número de impactos sobre la fauna y los ecosistemas marinos, que se verían multiplicados con la instalación y el funcionamiento de las explotaciones petroleras que podrían ponerse en marcha en el caso de que se encontraran depósitos aprovechables. Estas prospecciones se llevan a cabo mediante explosiones que, según avalan diferentes estudios, con el fin de localizar estructuras geológicas susceptibles de contener hidrocarburos, conllevan exploraciones sísmicas mediante barcos que arrastran, a una profundidad de entre 5 y 9 metros, cuatro emisores de ondas acústicas (*air-guns*) que emiten ondas de 215 decibelios (dB). Estos sonidos son tan fuertes que atraviesan toda la capa de agua y el subsuelo, penetrando a través de las diversas capas geológicas y reflejándose en la superficie. Los ecos que retornan se graban en unos receptores que se sitúan en un cable de 10.050 metros de longitud (*streamer*) arrastrado por el barco, lo que permite analizar las diversas estructuras geológicas estudiadas.

Las últimas noticias hablan de que el Govern de las Islas Baleares ha reiterado en Bruselas la oposición rotunda de las islas a los proyectos de prospecciones sísmicas petroleras y de que se ha reclamado al comisario europeo Karmenu Vella una evaluación de impacto ambiental transnacional y conjunta de los diferentes proyectos que afectan al archipiélago, lo cual parece ser una maniobra dilatoria que no ataca

verdaderamente el problema. Habrá que esperar la evolución del asunto los próximos meses.

4.3. Menorca y la energía eólica

Por otro lado, se ha anunciado que en Menorca se han solicitado una serie de autorizaciones para implantar un nuevo modelo de turbinas eólicas destinadas a la generación de energía eléctrica. Este será un tema a evaluar en el marco de la modificación de la planificación sectorial energética que hemos comentado antes. También será un tema a comentar en próximos números de la RCDA dado que puede marcar un punto de inflexión en la tímida política de renovables implantada en el archipiélago.

5. Otras noticias ambientales

5.1. Nueva delimitación del dominio público marítimo de Formentera

Formentera plantea, por las características fisiográficas que posee, una problemática singular con relación a la aplicación de la Ley de Costas y la delimitación del dominio público. Por eso, causa expectación el hecho de que esté prevista la nueva delimitación provisional del dominio público de Formentera para el mes de mayo de 2015.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha expuesto a las autoridades de la isla menor de las Pitiüses que está trabajando en la elaboración de la delimitación provisional del dominio público para la isla de Formentera y que se prevé que se termine a finales del mes de mayo. El trámite posterior implica que, una vez realizada la propuesta cartográfica, se remita a Madrid y quede pendiente de la aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros.

La nueva delimitación propuesta reconoce las históricas reclamaciones de vecinos de la isla y beneficiará de forma directa a un centenar de edificios y 80 propiedades de las zonas del Migjorn y de la punta norte de la isla. Esta nueva delimitación introduce una mayor seguridad y racionalidad en la gestión del litoral, a la vez que mantiene la preservación de los espacios naturales.

5.2. Proyecto de Reserva Marina en la Sierra de Tramuntana

Se está elaborando una nueva propuesta técnica para la declaración de la Reserva Marina de la Sierra de Tramuntana en Mallorca, una demanda de una parte del sector pesquero. Por este motivo se han realizado diferentes reuniones con el sector pesquero de la isla de Mallorca para sentar las bases de la propuesta que está previsto presentar a la Secretaría General de Pesca del Ministerio para solicitar la declaración de la Reserva Marina de la Sierra de Tramuntana. El procedimiento administrativo que se debe seguir consiste en elaborar una propuesta de orden dirigida a la Secretaría General de Pesca que implique establecer la extensión y localización del área que se propone como reserva marina, redactar la propuesta y enviarla al Ministerio.

La declaración de la Reserva implica una orientación proteccionista de este tramo de litoral de la sierra de Tramuntana. Además, toda reserva marina comporta un gasto importante de vigilancia y seguimiento biológico y pesquero, gasto que no es puntual sino permanente. Por otro lado, si se declara la reserva marina, sería la Administración del Estado la que se haría cargo de estos gastos porque se ubicaría en aguas de competencia estatal.

Como dato general se debe indicar que las Islas Baleares disponen de 500.000 hectáreas marinas protegidas repartidas de la manera siguiente: Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera (8.678 ha); praderas de *Posidonia oceanica* (67.000 ha); LIC Canal de Menorca (335.354 ha); las zonas marítimas protegidas, que suman casi 40.000 hectáreas, entre Fort d'en Moreu (2.500 ha), Émile Baudot (28.600 ha) y Ausiàs March (8.811 ha); y las reservas marinas, que comprenden cerca de 55.000 ha, Badia de Palma (2.379 ha), Migjorn (22.323 ha), Llevant de Mallorca (11.303 ha), Illa del Toro (136 ha), Illes Malgrats (91 ha), Nord de Menorca (5.085 ha) y Freus de Ibiza y Formentera (13.617 ha).

5.3. Ecología y turismo

A. La apuesta por el turismo ciclista no estacional

En otro ámbito, podemos destacar brevemente el hecho de la organización de la Primera Jornada Técnica sobre Vías Verdes, celebrada en marzo en Mallorca. En este evento se analizaron el potencial del cicloturismo y la dinamización del territorio como ejes de la promoción y el impulso de las llamadas vías verdes. En él participaron, entre otras

entidades, los Servicios Ferroviarios de Mallorca y la Fundación Ferrocarriles Españoles.

B. Más sobre el modelo turístico y el impacto territorial: el PRI de la playa de Palma

El Plan de Reconversión Integral de la Playa de Palma (PRI) ha recibido la aprobación definitiva y ha sido concebido como un instrumento realista y consensuado que tiene que permitir la reconversión efectiva de esta zona turística madura, cuestión esta discutida por algunos profesionales.

Este PRI debe permitir el avance de esta zona hacia un destino moderno que sirva para que en los próximos 30 o 40 años Palma siga teniendo la Playa de Palma como referente tanto turístico como económico.

Cabe recordar que el desarrollo de la Playa de Palma no se había paralizado, ya que la aprobación de la Ley de Turismo y el Decreto Ley de la Playa de Palma en 2012 permitieron que, mientras se desarrollaba el PRI, ya existiera un marco legislativo que ha posibilitado la reforma integral de 50 establecimientos turísticos de alojamiento, 30 incrementos de categoría y el inicio del reposicionamiento de esta zona, aunque sin conllevar procesos de reconversión de espacios públicos o comunitarios.

Los promotores afirman que con la aprobación definitiva de este PRI se entra en una nueva etapa en la que se podrán implantar más fácilmente hoteles de cinco estrellas en la Playa de Palma, donde hasta ahora no había ninguno, y se posibilitarán nuevas inversiones que no se habían realizado en las últimas décadas.

Comparativamente debe hacerse un último apunte, y es que, mientras que el PRI de 2010 apostaba por grandes obras públicas y adquisición de suelo mediante expropiación, el Plan aprobado definitivamente ahora apuesta por utilizar los recursos existentes, facilitar la inversión privada y priorizar la reconversión de los establecimientos. De los espacios públicos, de la calidad del entorno y del desarrollo de equipamientos comunitarios se dice bien poco.

5.4. Sobre proyectos de recuperación de fauna

Cerraremos esta crónica con unas breves notas en torno a las políticas de conservación de la fauna silvestre. Por una parte, destacaremos los esfuerzos realizados con el Plan de

Reintroducción del Águila Perdicera en Mallorca, que ha permitido la liberación de 24 ejemplares desde el año 2011, con un éxito importante.

Por otra, la colaboración privada entre dos entidades como el COFIB y la empresa que explota el Palma Aquarium ha permitido implantar acciones de gestión en la recuperación de la fauna marina con la puesta en funcionamiento del Centro de Recuperación de Fauna Marina, que ha atendido en un semestre 19 tortugas marinas y 11 cetáceos.

Sumari: 1. Introducció. 2. Activitat legislativa. 2.1. S'aprova la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears. 2.2. El Decret llei 1/2015 que aprova la instrucció de planificació hidrològica. 2.3. S'aprova el Reglament insular de desplegament de la Llei d'ordenació i ús del sòl per Mallorca. 3. Polítiques sobre patrimoni natural. 3.1. S'aprova el Pla Forestal de les Illes Balears. 3.2. S'aprova el IV Pla General de Defensa contra els Incendis Forestals. 3.3. Xarxa Natura 2000. A. Aprovació de nous plans de gestió. B. Declaració de noves zones especials de conservació. 3.4. En tramitació el nou PRUG del Parc Nacional de Cabrera. 4. Política energètica. 4.1. Modificació del Pla Director Sectorial Energètic. 4.2. Encara més sobre les polèmiques prospeccions submarines. 4.3. Menorca i l'energia eòlica. 5. Altres notícies ambientals: 5.1. Nova delimitació del domini públic marítim de Formentera. 5.2. Projecte de reserva marina a la serra de Tramuntana. 5.3. Ecologia i turisme. A. L'aposta pel turisme ciclista no estacional. B. Més sobre el model turístic i l'impacte territorial: el PRI de la Platja de Palma. 5.4. Sobre projectes de recuperació de fauna.

1. Introducció

La legislatura a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està arribant a la fi del trajecte i ara pot ser un bon moment per fer balanç. D'entrada s'ha de reconèixer que aquests quatre anys han estat marcats per la crisi econòmica, circumstància que ha condicionat la política ambiental per sobre d'altres àmbits. És cert que les retallades han afectat sectors molt sensibles com la sanitat o l'educació, però també és una realitat el fet que amb l'excusa de la crisi s'han relaxat —o directament suprimit— les polítiques ambientals: la necessitat de generar a qualsevol preu una activitat econòmica que minorés l'efecte d'aquesta situació econòmica extraordinàriament negativa, ha estat aprofitat pel sector conservador —que no conservacionista— per alliberar-se de determinades càrregues derivades dels controls administratius en defensa del medi ambient. Així, les modificacions normatives i les lleis noves que s'han generat al llarg dels quatre anys, s'han adreçat a incentivar al màxim les iniciatives empresarials a còpia de permetre lesions ambientals que anys enrere haurien suposat una barrera infranquejable.

No valorarem si aquestes polítiques han servit o no per sortir de la crisi, el que diu l'experiència és que les mesures legislatives estructurals triguen a donar resultats, per la qual cosa no serveixen en contextos conjunturals. És molt improbable que la flexibilitat introduïda en la legislació turística tingui efectes directes sobre la conjuntura econòmica a curt termini —per això existeixen les mesures extraordinàries, urgents i transitòries—, però sí que implanta règims basats en les excepcions que impacten sobre l'entorn i sobre els recursos naturals; d'altra banda, l'experiència també apunta al fet que de les crisis se'n surt quan finalitzen, sense que les polítiques subregionals puguin influir realment en la seva evolució. En un món globalitzat amb economies interdependents, provoca més impacte en el mercat turístic de les Illes Balears la inestabilitat en els

mercats emergents de la regió del Magrib que totes les mesures de maquillatge en clau autonòmica que es puguin adoptar.

Això no obstant, la legislatura ha aportat al nostre dret lleis importants com la de turisme, la d'ordenació i ús del sòl, l'agrària, la de mines, la de comerç, amb mesures que tenen impactes directes i indirectes sobre la qualitat del nostre entorn. Igualment, aquesta legislatura s'ha caracteritzat per la reducció o simplificació dels controls d'impacte ambiental i de sostenibilitat ambiental. Les facilitats als promotors hotelers, infractors urbanístics, impulsors de grans centres comercials i empresaris d'activitats extractives —per esmentar uns quants exemples—, han marcat alguns dels eixos més polèmics de les lleis esmentades. També les facilitats per impulsar activitats complementàries al camp, amb la finalitat d'evitar l'abandonament de la producció agrícola, poden tenir repercussions importants en l'entorn, tot i que s'emmarquen en una lògica destinada a impedir que desaparegui el sector primari.

Les notes positives derivarien de l'aprovació de la nova planificació forestal, o de la delimitació i ampliació de zones de conservació especial derivades de la implantació de la xarxa ecològica europea Natura 2000. També es pot destacar la introducció de les energies renovables al Pla Director Sectorial Energètic o la creació de noves reserves marines.

A l'altre costat se situen iniciatives de protecció que en realitat suposen la minoració dels criteris ambientals, com ara les previsions del nou PRUG del Parc Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera, o el model frustrat de reconversió de la Platja de Palma, que no respon a les expectatives inicials o als plantejaments embrionaris previstos en els inicis de tot el procés de reconversió integral d'aquesta zona turística madura.

Pel que fa a les polítiques energètiques, cal apuntar que les iniciatives privades que volen obrir-se camí troben moltes dificultats, i això és així per les directrius implantades des de l'Administració General de l'Estat i del Govern de Madrid. Caldrà un gir copernicà per aconseguir que les renovables trobin el camí a les nostres illes, on les condicions climàtiques són idònies perquè s'arrelin amb èxit.

Segons les enquestes, els resultats de les eleccions autonòmiques i locals sembla que apuntaran cap a un nou rumb pel que fa a polítiques ambientals, però aquesta anàlisi caldrà fer-la en el proper número de la RCDA i a la vista de la conformació dels nous

governos. Així que, de moment, els temes que hem assenyalat —i alguns altres— són els que podrem examinar amb més amplitud en els apartats següents.

2. Activitat legislativa

2.1. S'aprova la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears

El Ple del Parlament va aprovar el dimarts 2 de desembre la Llei agrària de les Illes Balears, amb la intenció d'ordenar en un únic text els sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari, i també el desenvolupament rural de les Illes Balears, sector que fa dècades que perd pes específic en el PIB de l'arxipèlag. L'exposició de motius de la llei argumenta que la normativa proposada era reclamada pel sector des de feia més de trenta anys. Un dels objectius que es proposa el text legal és fer rendible l'activitat agrària de manera que els pagesos puguin mantenir les seves explotacions, i que s'aturi així l'abandonament progressiu del camp illenc.

Pel que fa a l'elaboració i tramitació de la nova llei, a la ponència en seu parlamentària es va afirmar que sorgeix del consens amb el sector i de les aportacions fetes per administracions i organismes, i també per la societat civil, durant el procés de participació que va començar el passat mes de març de 2014. Un cop tancat el text, amb les millores introduïdes a les meses sectorials realitzades, el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma aprovà el 12 de setembre del 2014 el projecte esmentat. Posteriorment, durant la sessió plenària celebrada el 4 de novembre, el projecte va superar el debat d'esmenes a la totalitat, i va continuar la tramitació fins al debat i votació final.

Entre els principis i objectius que podem trobar en l'articulat, veiem els de resoldre els problemes de l'agricultura balear, fomentar la inversió i l'ocupació en el sector primari, revalorar el patrimoni rural i facilitar la gestió activa del territori i del medi ambient a partir de l'activitat agrària.

Un dels aspectes més polèmics —i criticat pel sector conservacionista— és el fet que aquesta llei obre les portes al desenvolupament d'activitats complementàries agroturístiques de diversificació de l'activitat agrària i regula la venda directa de productes a les explotacions mateixes; amb això, la llei promou la supervivència del sector però a costa de perdre pes com a activitat primària i deriva la rendibilitat a l'obtenció de rendes del sector terciari —turisme i comerç. També destaca la

consideració del sector forestal com una activitat agrària, amb especial atenció a l'impuls de la seva gestió i a la recerca d'un valor de mercat dels aprofitaments forestals, principalment la biomassa, amb la finalitat de generar economia i ocupació, mantenir els ecosistemes i prevenir els incendis forestals. Aquesta *vis atractiva* de la llei també ha sofert crítiques, atès que s'immisceix en un àmbit sectorial amb substantivitat pròpia, com és el forestal.

En principi, i d'acord amb el que es desprèn de l'exposició de motius, la llei que s'ha aprovat dóna facilitats per començar i dur a terme l'activitat agrària i complementària, que queden reconegudes com a ús admès en el medi rural i no estan sotmeses a la declaració d'interès general; això, pel que fa a les activitats complementàries, implica la modificació de la matriu d'usos en sòl rústec regulada en la legislació d'ordenació territorial —més concretament en les Directrius d'ordenació territorial (DOT)—, cosa que implica una nova alteració del règim substantiu mitjançant una llei sectorial que no és el lloc adequat per alterar aquest règim. D'una altra banda, la llei possibilita el canvi d'ús en edificis existents per dur-hi a terme activitats complementàries de diversificació agrària o instal·lar-hi agroindústries de transformació de la producció pròpia, sense contravenir la tradició de prohibició d'implantació del sector industrial en el sòl no urbà ni urbanitzable, d'aquesta manera, el sòl rústec perd la condició bàsica de destinació conforme a la seva naturalesa i destinació, en clara vulneració de la legislació bàsica estatal del sòl, que d'una banda estableix:

Artículo 7. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo.

1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.
2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.

Això implica el fet que una legislació agrària desplaça —i, al meu parer, vulnera— les previsions de la legislació bàsica estatal pel que fa a la delimitació de l'estatut del sòl. Igualment, la legislació estatal, també afirma —contradient la legislació autonòmica que

ara comentem— que el dret de propietat del sòl comprèn les facultats d'ús, gaudi i explotació del mateix sòl conforme a l'estat, classificació, característiques objectives i destinació que tingui en cada moment, d'acord amb la legislació pel que fa a l'ordenació territorial i urbanística aplicable pel que fa a les característiques i situació del bé. I l'article 8.2 del text bàsic estatal afirma:

2. En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 12.2,a), las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

Implantar indústries en sòl rústic no sembla que derivi de l'establiment de límits, sinó del seu aixecament; igualment, la perversió de la implantació d'agroturismes en absència d'activitat agrícola real trenca amb la tradició d'implantació d'activitats complementàries per invertir els termes i promoure activitats principals alienes a la naturalesa i destinació normal del sòl rústic.

Al marge del que hem dit anteriorment, la Llei —amb relació al fet diferencial insular— exigeix a l'Estat i a la Unió Europea el reconeixement d'aquest fet i la necessitat de recompensar els inconvenients que representa per al sector l'aïllament. La Llei també regula l'obligació del Govern de consignar pressupostàriament les dotacions econòmiques necessàries per garantir el cofinançament de les línies d'ajuda del sector que es vagin implantant.

Potser, si hi ha un aspecte positiu, és la declaració de bona voluntat, d'una banda: de fomentar la incorporació dels joves i les dones al sector; i d'altra banda: l'impuls de la producció local i les marques de qualitat, juntament amb el règim de declaració de zones catastròfiques, la creació de l'Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari amb l'objectiu de millorar el coneixement agrari i agroalimentari de les Illes Balears o la regulació, per primera vegada, de la producció, l'emmagatzematge i la gestió dels fems.

Pel que fa a l'estructura formal, hem de destacar que es tracta d'una llei extensa que conté 179 articles, dividits en 1 títol preliminar, 10 títols temàtics, 5 disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria, 9 disposicions finals i 1 annex; la intencionalitat del legislador ha estat crear un text aglutinador del règim d'ordenació de gairebé tota la problemàtica del camp de les Illes.

Finalment, i com a complement a l'anàlisi de la Llei agrícola, el Govern ha començat a elaborar i tramitar els decrets per regular el registre d'explotacions agràries, la venda directa i el catàleg d'aliments tradicionals, en desplegament del nou text legal.

Igualment, en la mateixa línia, el Consell de Govern va acordar destinar 16,3 milions d'euros per garantir el cofinançament anual de les ajudes agroambientals incloses en el nou Pla de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2015-2020, subvencions que es poden sol·licitar al FOGAIBA a partir de l'1 de març i fins al 15 de maig de cada exercici econòmic.

2.2. El Decret llei 1/2015 que aprova la instrucció de planificació hidrològica

Les Illes Balears arrosseguen un retard considerable pel que fa a l'adaptació a les previsions de la Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del Consell de 23 d'octubre del 2000, per la qual s'estableix el marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. La revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears també du un retard considerable; de fet, a l'anterior número de la RCDA ja donàvem compte que el nou Pla Hidrològic de les Illes Balears havia iniciat la tramitació ambiental i que, d'acord amb la disposició addicional dotzena del Text refós de la Llei d'aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), iniciava un període de consultes.

El Pla continua amb la tramitació i, de fet, a finals d'abril es completava el període de consultes assenyalat. Mentrestant, s'ha decidit aprovar el Decret llei 1/2015, de 10 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció de planificació hidrològica per a la demarcació hidrogràfica intracomunitària de les Illes Balears². La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 22 d'abril de 2015, després d'un debat i d'una votació de totalitat, acordà validar el Decret llei 1/2015, de 10 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció de planificació hidrològica per a la demarcació hidrogràfica intracomunitària de les Illes Balears. Aquesta resolució va ser publicada al BOIB núm. 066 de 2015.

Així, l'exposició de motius del decret llei reconeix que la promulgació de la Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, va comportar un canvi

²BOIB, núm. 052 de 2015.

fonamental en la gestió i la planificació de les aigües en els països de la Unió Europea. L'objectiu d'aquesta Directiva és establir un marc complet de protecció per a tota l'aigua comunitària. Com a part d'aquest objectiu, s'ha de destacar l'esforç de tots els estats membres per aconseguir, per al 2015, un bon estat —ecològic, químic i quantitatiu— de les aigües, ja siguin interiors, superficials, subterrànies, de transposició o costeres.

Amb tot, en un altre apartat, la justificació del decret llei afirma que de l'estudi de la diversitat d'objectius que planteja la Directiva 2000/60/CE se'n dedueix la complexitat i l'extensió que planteja incorporar-la als drets nacionals dels estats membres, atès que estableix disposicions que afecten diversos aspectes de l'aigua, tant tècnics com administratius, la qual cosa exigeix que s'adoptin mesures diverses que s'han de plasmar necessàriament en disposicions jurídiques de distints rangs normatius. Per tot això, la transposició de la Directiva marc i el compliment de les obligacions que en deriven han comportat un esforç important, especialment a Espanya, on els assumptes relacionats amb l'aigua tenen repercussions econòmiques, socials i polítiques importants.

Si bé és cert tot el que hem dit anteriorment, sobta el fet que per la via d'un decret llei, amb el Parlament dissolt i amb la convocatòria d'eleccions a la vista, s'aprovi ara amb caràcter d'urgència aquest règim de planificació hidrològica per a la demarcació hidrogràfica intracomunitària de les Illes Balears, com a pedaç que intenta esmenar la mancança i el retard en la tramitació del veritable Pla Hidrològic. Aquesta disposició de rang legal s'aprova amb la denominació d'Instrucció de planificació hidrològica de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears en transposició de la Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.

Així, l'objecte d'aquesta Instrucció de planificació hidrològica és establir els criteris tècnics per a la sistematització dels treballs d'elaboració dels plans hidrològics de la demarcació intracomunitària de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 82 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat mitjançant el Reial decret 907/2007, de 6 de juliol; analitzat amb deteniment, és un intent de demostrar que es treballa en la redacció del Pla Hidrològic amb la finalitat d'eludir les responsabilitats d'incompliment dels terminis i contingut de la Directiva.

2.3. S'aprova el Reglament insular de desplegament de la Llei d'ordenació i ús del sòl per Mallorca

Com ja vam fer ressò en aquesta RCDA, ara fa poc més d'un any que es va aprovar la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS), que en la disposició final segona preveia un règim d'autorització als consells insulars per desplegar reglamentàriament, totalment o parcialment, aquesta llei, a més de dictar les disposicions reglamentàries necessàries per complir les remissions que aquesta llei fa a normes d'aquest caràcter.

Per ara, l'únic Consell que ha culminat les tasques d'elaboració i aprovació definitiva del desplegament reglamentari ha estat el Consell Insular de Mallorca, que ha optat per la titànica tasca d'elaborar un únic text de desplegament, que substitueix els reglaments clàssics de planejament, gestió i disciplina urbanística, a més de moltes altres disposicions administratives de caràcter normatiu desplegades al llarg dels darrers quaranta anys.

Així, el Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de data 16 d'abril de 2015, va aprovar definitivament el text del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca, publicat al BOIB, núm. 066, de 30 d'abril de 2015.

Aquest extensíssim reglament, que té 459 articles, 5 disposicions addicionals, 10 disposicions transitòries i 3 disposicions finals, entra en vigor el 30 de maig de 2015.

Un dels reptes de l'esmentat reglament és resoldre algunes de les incògnites i previsions mal resoltes en el text de la llei; un altre dels objectius és sistematitzar la normativa reglamentària acumulada durant els anys en què va estar en vigor la Llei de 1975 i el seu Text refós de 1976, amb el desplegament reglamentari modificat nombroses vegades al llarg del temps. Igualment calia integrar tota la normativa autonòmica de rang reglamentari i els buits que, sense disposar de l'obligatorietat de remetre's a un text de rang legal, han estat descuidats per la LOUS. També veiem que el Reglament desplega els preceptes de la llei que ho requereixen, tenint en compte que en alguns casos aquest desplegament resulta innecessari, atès el grau de detall amb què la Llei d'ordenació i ús del sòl regula determinades matèries; així es compleix la previsió en un mateix text reglamentari de les dues habilitacions previstes en la disposició final segona de la LOUS.

Un examen a aquesta extensa disposició reglamentària ens permet comprovar que el grau de sistematització assolit és prou satisfactori, especialment si ens atenim al fet que ha de desplegar una llei plena de previsions controvertides, algunes contradiccions internes, i altres articles que —senzillament— no s'arriben a comprendre.

Aquest Reglament de la Llei d'ordenació i ús del sòl de l'illa de Mallorca s'estructura de manera molt similar a la de la mateixa LOUS, i respecta, així mateix, els àmbits de potestat reglamentària normativa del Govern de les Illes Balears, en les matèries que, en atenció al caràcter suprainsular inherent i en els termes que indica l'apartat 4 de l'article 15 de la Llei, s'han especificat de manera expressa en els seus preceptes, i també en l'apartat 2 de la disposició final segona.

Caldrà esperar ara la possibilitat que un hipotètic canvi de Govern vulgui modificar la LOUS per eradicar-ne els elements més polèmics i controvertits, la qual cosa pot implicar, al seu torn, haver de modificar consegüentment el reglament que s'ha aprovat ara.

3. Polítiques sobre patrimoni natural

3.1. S'aprova el Pla Forestal de les Illes Balears

En data 20 de març de 2015 es va aprovar el Decret 11/2015. Amb aquest acord del Consell de Govern de les Illes Balears es va donar conformitat al Pla Forestal de les Illes Balears (2015-2035).

El Pla Forestal de les Illes Balears es concep com un document que ha de servir de referència per a la política forestal de la comunitat autònoma per als vint anys vinents. D'aquesta manera, les Illes Balears deixen de ser l'única comunitat autònoma de tot l'Estat espanyol sense pla forestal propi per conservar i gestionar els boscos. El document que s'ha aprovat és fruit d'un procés de participació social que es va iniciar al novembre de 2012, i en el qual han participat més de 375 institucions i ciutadans al llarg de 10 sessions col·lectives de treball i 24 reunions amb especialistes ambientals i gestors forestals. El Pla també s'ha sotmès a la corresponent avaluació ambiental estratègica en aplicació de la Llei 11/2006.

El Pla Forestal, que estableix l'estratègia per afrontar de manera participada i consensuada els reptes que presenta la futura gestió dels boscos i les superfícies

forestals de les Illes Balears, preveu una vigència de 21 anys, per atènyer els tres propers períodes financers de la Unió Europea (2015-2020, 2021-2028 i 2029-2035). Durant el primer període (2015-2020), el Pla estableix una previsió pressupostària de 185 milions d'euros a partir del finançament públic (europeu, nacional i autonòmic) que actualment s'aplica a actuacions des del punt de vista forestal.

El Pla comprèn tot l'àmbit forestal de les Illes Balears, constituït per més de 222.000 hectàrees de superfície forestal, el 44% del territori insular. A més, per primera vegada s'estudia detalladament l'estructura de la propietat forestal de la comunitat autònoma, amb 20.086 propietats forestals i 19.019 propietats agroforestals, de les quals en resulta una mitjana de 5 hectàrees per explotació forestal i 11 hectàrees per explotació agroforestal.

El document aprovat se centra en la reactivació i la reorganització del sector forestal com a motor de desenvolupament de les comarques rurals, la generació de serveis ambientals, la implantació de noves iniciatives d'economia verda i la posada en valor dels productes forestals. A més, proposa la creació d'un comitè forestal com a òrgan de coordinació de la política forestal amb representació del sector, de les administracions i de la societat civil.

Per assolir aquests objectius generals, el Pla es vertebrava en cinc eixos d'intervenció, en els quals s'enquadren els 18 reptes als quals es pretén donar una resposta eficaç durant el període de vigència, a través de l'execució d'un total de 98 mesures específiques i iniciatives concretes, que es defineixen amb detall.

També es preveu que en el termini de sis mesos comptadors a partir que hagi transcorregut el primer període de vigència (2015-2020), el Govern ha d'elaborar un informe d'avaluació, revisió i justificació del grau de compliment del Pla.

Amb aquest Pla, que es complementa amb els inventaris realitzats i els plans d'emergències en matèria forestal, es completa el panorama d'ordenació integral dels boscos de les Illes.

3.2. S'aprova el IV Pla General de Defensa contra els Incendis Forestals

D'altra banda, amb pocs dies de diferència, el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma va aprovar el Decret 22/2015, de 17 d'abril, pel qual s'aprova el IV Pla General de Defensa contra Incendis Forestals de les Illes Balears (2015-2024), que, amb una vigència de deu anys, incideix en la prevenció especialment en zones urbanoforestals, potencia la coresponsabilitat i incorpora les noves tecnologies als operatius d'extinció davant les contingències del foc a les zones rurals agrícoles i boscoses.

Igualment, i amb relació a l'eina de defensa contra els incendis forestals, el Govern i la Fundació Natura Parc van renovar l'acord de col·laboració per a la prevenció d'incendis mitjançant l'ús de pasturatge amb bestiar equí recuperat. La iniciativa es correspon amb una de les mesures previstes en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals a la serra de Tramuntana, i que ja es va engegar l'estiu passat amb un pressupost de 2,1 milions d'euros.

Els aspectes més destacats del IV Pla General de Defensa contra Incendis Forestals de les Illes Balears per al període 2015-2024, són la incidència en la necessitat de l'autoprotecció dels habitatges a les zones urbanoforestals, la potenciació de les inversions pel que fa a prevenció i l'aplicació de les noves tecnologies als operatius d'extinció. El Pla, que integra totes les aportacions de l'extens i intens procés de participació social establert per a l'elaboració del Pla Forestal de les Illes Balears, aprovat recentment, estableix una programació estratègica per als deu anys vinents amb l'objectiu general de disminuir la incidència dels incendis (nombre, freqüència, gravetat, superfície cremada, etc.) al territori de les Illes Balears.

Igualment, el IV Pla General de Defensa contra Incendis Forestals de les Illes Balears s'emmarca en una realitat en la qual es preveu que hi haurà incendis cada vegada més extensos, intensos i perillosos. Per això, estableix una planificació d'actuacions que s'han de dur a terme en tres fases: actuacions urgents (1-2 anys); actuacions a curt termini (3-6 anys), i actuacions a mitjà termini (7-10 anys), i una estimació pressupostària de 70 milions d'euros, que s'han de finançar amb els pressupostos de la comunitat autònoma i dels fons europeus del Pla de Desenvolupament Rural.

Així, segons les dades que recull el document, el nou Pla estableix un mapa d'alt risc d'incendis per zones, del qual es desprèn que el 36,2% de la superfície total de

l'arxipèlag i el 81,3% de la superfície forestal s'han de considerar com a zones d'alt risc. D'aquestes, la concentració més gran se situa a Eivissa, on la meitat de la superfície total (49,8%) i gairebé la totalitat de la superfície forestal (96,5%) corresponen a aquesta categoria. La segueix de prop Menorca, amb el 45,8% i el 86,8% de les superfícies total i forestal, respectivament; seguidament Mallorca, que presenta un 32,4% i un 77,7% de zones d'alt risc respecte de les superfícies total i forestal, i finalment Formentera, on les zones d'alt risc ocupen el 29,6% del territori i el 56,6% de la superfície forestal.

3.3. Xarxa Natura 2000

A. Aprovació de nous plans de gestió

El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma va adoptar el Decret 14/2015, de 27 de març, pel qual s'aproven cinc plans de gestió de determinats espais protegits per la xarxa ecològica europea Natura 2000 a les Illes Balears. Aquests plans de gestió afecten els àmbits següents: coves, basses temporals, albuferes de Mallorca, Mondragó i Es Trenc-Salobrar de Campos. Aquests cinc plans inclouen la gestió de 46 llocs d'importància comunitària (LIC) de Mallorca, Menorca i Formentera, els quals, per aquesta via, s'han declarat zona especial de conservació (ZEC), i així compleixen les directives europees i les normatives estatals pel que fa a protecció d'espais naturals.

Segons es desprèn de la memòria que acompanya el Decret, aquests nous plans de gestió són fruit dels acords adoptats per mitjà del procés de participació pública dut a terme en els darrers dos anys i que ha implicat 1.123 persones, d'unes 300 associacions i d'entitats de caràcter social, cultural, econòmic i ambiental, i també de totes les administracions públiques afectades. Al llarg d'aquest procés, 21 organitzacions, administracions i particulars han presentat al·legacions o han informat els cinc plans de gestió aprovats. La memòria esmenta que el 60% de les aportacions han estat incorporades en els documents definitius.

Els plans de gestió Natura 2000 aprovats s'estructuren de la següent forma: una primera part de diagnosi, en què es descriuen els hàbitats i les espècies d'interès comunitari; una segona en què s'estableixen els objectius i les mesures per garantir-ne la conservació; i una tercera, en la qual es detallen les actuacions de seguiment del pla, les prioritats de les mesures i el pressupost previst per executar-les.

Els cinc plans aprovats regulen la gestió d'una superfície total d'unes 8.000 hectàrees d'especial conservació. De forma individual, el de coves inclou 30 cavitats, declarades ZEC, amb una superfície de 2.898 hectàrees de l'illa de Mallorca; el de basses fa referència a 12 ZEC amb una superfície de 331,8 ha entre Mallorca, Menorca i Formentera; el de les albuferes de Mallorca s'ocupa de les dues ZEC que formen part del Parc Natural de s'Albufera i de la Reserva Natural de s'Albufereta, amb un total de 2.593 hectàrees; el de Mondragó inclou la gestió d'una ZEC, dins el Parc Natural, d'una extensió de 780 hectàrees, i finalment el d'Es Trenc-Salobrar de Campos gestiona una ZEC que ocupa una superfície de 1.452 hectàrees. Els plans s'han de revisar cada sis anys i per al primer període tenen un pressupost global d'1.262.000 euros.

A més d'aquests cinc plans de gestió, el Govern de la CAIB està treballant en l'elaboració de 20 plans de gestió més que han de recollir les 91 zones ZEC restants. En total, les Illes Balears tindran 25 plans, que inclouran la gestió de 137 ZEC. Es preveu aquests plans que es vagin aprovant progressivament, com veurem l'apartat següent.

B. Declaració de noves zones especials de conservació

Recentment s'ha donat llum verda a la declaració de noves zones especials de conservació, amb l'acord de la Comissió de Coordinació de Política Territorial, que ha informat favorablement la declaració com a ZEC dels llocs d'importància comunitària (LIC) corresponents a la serra de Tramuntana, ses Salines d'Eivissa i Formentera, i l'arxipèlag Cabrera, com a pas previ a l'aprovació definitiva per part de l'Executiu balear.

Cal recordar que el Govern de la CAIB està elaborant els plans de gestió de les zones declarades com a LIC de la xarxa ecològica europea Natura 2000 amb l'objecte de declarar-les ZEC, complint així amb les directives europees i la normativa bàsica estatal pel que fa a la protecció d'espais naturals. El Govern va aprovar al seu dia els primers cinc plans que inclouen la gestió de 46 LIC, tasca que continua ara amb la tramitació de la resta de plans que agruparan les 91 zones restants. Entre aquests plans es troben els tres informats favorablement per la Comissió esmentada.

Els plans als quals ens referim són: el de gestió de la serra de Tramuntana, que inclou 29 espais, amb una superfície total de 31.397,06 ha a l'illa de Mallorca; el de gestió de ses Salines d'Eivissa i Formentera, que afecta una superfície de 16.434,89 ha, de les

quals 13.476,61 (82%) són marines, i el de gestió de l'arxipèlag de Cabrera, que afecta una superfície de 20.531,69 ha, de les quals el 93% pertanyen a l'àmbit marí.

Els documents relatius a la declaració de ZEC i el contingut dels plans de gestió es poden consultar a la pàgina web <<http://xarxanatura.es/pg-aprovats/>>.

3.4. En tramitació el nou PRUG del Parc Nacional de Cabrera

El panorama relatiu a la protecció del medi natural el completem en aquesta crònica amb la notícia de la tramitació de la revisió del Pla Rector d'Ús i de Gestió (PRUG) del Parc Nacional Marítim i Terrestre de l'arxipèlag de Cabrera. Així, el BOIB número 66, de 30 d'abril, va publicar l'anunci del tràmit d'informació pública del procediment iniciat.

El Patronat del Parc Nacional, reunit el 20 d'abril, va informar favorablement per majoria dels assistents, la proposta de nou PRUG que tingué el vot en contra de les dues entitats conservacionistes presents al Patronat: Oceana i GOB. D'altra banda, el representant dels Agents del Medi Ambient també hi votà en contra. Els dos representants de les entitats científiques, l'Institut Espanyol d'Oceanografia i la Universitat de les Illes Balears es van abstenir.

Els motius dels vots en contra i de les abstencions esmentades es fonamenten en l'apreciació que el nou PRUG obre la porta a la intensificació de l'ús públic recreatiu i, per contra, no reforça les polítiques i les mesures de conservació. De fet, l'ampliació de zones amb activitat antròpica i l'increment de la pressió humana admesa banalitzava la finalitat de protecció i de conservació del Parc Nacional, que ja es va veure qüestionada en el moment de l'obertura d'un alberg a l'illa, un indret on els recursos són escassos, manca aigua, l'energia es produeix amb combustibles fòssils i la generació de residus planteja un greu problema.

Un altre dels elements de discrepància es troba en la reiterada petició d'ampliació de l'àmbit del Parc Nacional, que ha estat descartada per l'actual equip de govern, tot i els estudis que n'avalen la conveniència. Tampoc no s'amplien les zones de reserva integral, no es planteja reduir l'esforç pesquer, ni s'estableix un indicador de capacitat de càrrega màxima de persones per evitar les afectacions negatives de l'afluència de visitants, massificació que afecta els valors naturals de l'espai i a la percepció del visitant.

La crítica final s'adreça a la concepció dels espais naturals que ha demostrat l'actual Govern de la CAIB, una concepció mercantilista i de rendiment econòmic per damunt de la finalitat ecològica de conservació. Als espais protegits de les Balears, les mesures de conservació del patrimoni natural (amb investigació, seguiment, manteniment, restauració, vigilància, ús públic educatiu o naturalístic...) han estat marginades per alternatives d'ús turístic, d'oci i esportives que apunten a la privatització d'aquests espais.

4. Política energètica

4.1. Modificació del Pla Director Sectorial Energètic

La Comissió de Coordinació de Política Territorial de la CAIB al mes d'abril va informar favorablement la modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, relativa a l'ordenació territorial de les energies renovables. L'objectiu d'aquesta modificació és disposar d'una planificació territorial que reguli l'aptitud del territori per acollir instal·lacions d'energies renovables, fent especial èmfasi en la regulació de les tecnologies madures: fotovoltaica i eòlica.

Després d'aquest tràmit, i al tancament d'aquesta crònica, s'ha publicat el Decret 33/2015, de 15 de maig, d'aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears (BOIB núm. 073 de 2015). Al preàmbul del decret s'afirma que el model energètic actual, basat en els combustibles fòssils, és la causa principal del fenomen del canvi climàtic. L'augment de la temperatura mitjana de la terra associat a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, com el CO₂ i d'altres, posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals; el desenvolupament econòmic i social, i la salut i el benestar de les persones.

Així, des de la base del reconeixement del canvi climàtic, la nova planificació assumeix que l'únic camí possible per assolir els objectius de reducció d'emissions establerts per les administracions és el desenvolupament d'un model energètic més sostenible, que ha d'estar marcat per la participació creixent de les energies renovables i pel desenvolupament progressiu d'un model de generació elèctrica distribuïda, en què la penetració progressiva del vehicle elèctric ha de tenir un paper fonamental en el desenvolupament de les xarxes energètiques intel·ligents. D'altra banda, es reconeix el fet objectiu que a les Illes Balears, la participació de les energies renovables és

insuficient. Així, sobre el total de la producció elèctrica, l'aportació de les energies renovables no arriba al 3%. Aquesta dada situa la nostra comunitat com una de les que menys penetració d'energies renovables presenta.

Com afirma al document aprovat, l'objectiu últim d'aquest decret és incrementar la producció d'energia elèctrica procedent de fonts renovables a les Illes Balears per complir les previsions autonòmiques, estatals i europees pel que fa a energies renovables i de reducció d'emissions de CO₂. Per això, la normativa se centra en les tecnologies que avui es consideren madures i capaces de participar de forma significativa en el sistema de producció elèctrica: la fotovoltaica i l'eòlica. Les altres tecnologies, com la biomassa, hauran de ser objecte d'una planificació específica en el moment oportú.

4.2. Encara més sobre les polèmiques prospeccions submarines

Com hem assenyalat en altres números de la RCDA, l'assumpte de les prospeccions submarines continua essent notícia a les Balears i a les Illes Canàries, on encara plana l'amenaça que comporta la recerca de combustibles fòssils als fons marins que envolten l'arxipèlag. La controvèrsia és màxima a causa de la gestió opaca que s'ha fet, en la qual no s'acaba de discernir quines autoritzacions s'han atorgat i quines prospeccions es duen a terme sense control, i per les afirmacions contradictòries que es fan amb relació al posicionament del Govern de les Illes.

Aquest tipus de prospeccions sísmiques duen associades un gran nombre d'impactes sobre la fauna i els ecosistemes marins, que es veurien multiplicats amb la instal·lació i funcionament de les explotacions petrolieres que podrien posar-se en marxa en cas que es trobessin dipòsits aprofitables. Aquestes prospeccions es fan mitjançant explosions que, segons avalen diferents estudis, i per localitzar estructures geològiques susceptibles de contenir hidrocarburs, impliquen exploracions sísmiques mitjançant vaixells que arrossegueu, a una fondària entre 5 i 9 metres, 4 emissors d'ones acústiques (*air-guns*) que emeten ones de 215 decibels (dB) cadascun. Aquests sons són prou forts per travessar tota la capa d'aigua i el subsòl, penetrar a través de les diverses capes geològiques i reflectir-se a la superfície. Els ecos que retornen es graven en uns receptors que se situen en un cable de 10.050 metres de llargada (*streamer*) arrossegat pel vaixell, i permeten analitzar les diverses estructures geològiques que s'han estudiat.

Les darreres notícies parlen que el Govern de les Illes Balears ha reiterat a Brussel·les l'oposició rotunda de les Illes als projectes de prospeccions sísmiques petrolieres, i s'ha reclamat al comissari europeu Karmenu Vella una avaluació d'impacte ambiental transnacional i conjunta dels diferents projectes que afecten l'arxipèlag, la qual cosa sembla només una maniobra dilatòria que no ataca veritablement el problema. Caldrà esperar l'evolució de l'assumpte en els propers mesos.

4.3. Menorca i l'energia eòlica

D'altra banda, s'ha anunciat que a Menorca s'han sol·licitat una sèrie d'autoritzacions per implantar un nou model de turbines eòliques destinades a la generació d'energia elèctrica. Aquest és un tema que s'ha d'avaluar en el marc de la modificació de la planificació sectorial energètica que hem comentat abans. També és un tema que caldrà comentar en propers números de la RCDA, atès que pot marcar un punt d'inflexió en la tímida política de renovables implantada a l'arxipèlag.

5. Altres notícies ambientals

5.1. Nova delimitació del domini públic marítim de Formentera

Formentera planteja, per les característiques fisiogràfiques que presenta, una problemàtica singular amb relació a l'aplicació de la Llei de costes i la delimitació del domini públic. Per això, causa expectació el fet que estigui prevista la nova delimitació provisional de domini públic de Formentera per al mes de maig de 2015.

El Ministeri d'Agricultura, Medi Ambient i Alimentació ha exposat a les autoritats de l'illa menor de les Pitiüses, que està treballant en l'elaboració de la delimitació provisional de domini públic per a l'illa de Formentera, i que es preveu que s'enllesteixi a finals del mes de maig. El tràmit posterior implica que, un cop realitzada la proposta cartogràfica, es remeti a Madrid i quedi pendent de l'aprovació definitiva per part del Consell de Ministres.

La nova delimitació proposada reconeix les històriques reclamacions de veïns de l'illa i beneficiarà de forma directa un centenar d'edificis i 80 propietats de les zones del Migjorn i de la punta nord de l'illa. Aquesta nova delimitació introdueix més seguretat i

racionalitat en la gestió del litoral, a la vegada que manté la preservació dels espais naturals.

5.2. *Projecte de reserva marina a la serra de Tramuntana*

S'està elaborant una nova proposta tècnica per a la declaració de la reserva marina de la serra de Tramuntana a Mallorca, demanda d'una part del sector pesquer. Amb aquest motiu s'han realitzat diferents reunions amb el sector pesquer de l'illa de Mallorca per assentar les bases de la proposta que està previst presentar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri per sol·licitar la declaració de la reserva marina de la serra de Tramuntana. El procediment administratiu que s'ha de seguir consisteix a fer una proposta d'ordre a la Secretaria General de Pesca que impliqui establir l'extensió i localització de l'àrea que es proposa com a reserva marina, redactar-ne la proposta i trametre-la al Ministeri.

La declaració de la reserva implica una orientació proteccionista d'aquest tram de litoral de la serra de Tramuntana. A més, tota reserva marina comporta una despesa important de vigilància i seguiment biològic i pesquer, despesa que no és puntual sinó permanent. D'una altra banda, si es declara la reserva marina, és l'Administració de l'Estat la que s'ha de fer càrrec d'aquestes despeses perquè s'ubicarà en aigües de competència estatal.

Com a dada general s'ha de fer palès que les Illes Balears disposen de 500.000 hectàrees marines protegides repartides de la manera següent: Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera (8.678 ha); praderes de *Posidonia oceanica* (67.000 ha); LIC Canal de Menorca (335.354 ha); les zones marítimes protegides que sumen quasi 40.000 hectàrees entre Fort d'en Moreu (2.500 ha), Émile Baudot (28.600 ha) i Ausiàs March (8.811 ha), i les reserves marines que acumulen prop de 55.000 hectàrees RM Badia de Palma (2.379 ha), RM de Migjorn (22.323 ha), RM Llevant de Mallorca (11.303 ha), RM de l'Illa del Toro (136 ha), RM Illes Malgrats (91 ha), RM Nord de Menorca (5.085 ha) i RM dels Freus d'Eivissa i Formentera (13.617 ha).

5.3. *Ecologia i turisme*

A. L'aposta pel turisme ciclista no estacional

En un altre àmbit, podem destacar breument el fet de l'organització de la Primera Jornada Tècnica sobre les Vies Verdes que es va realitzar al mes de març a Mallorca. En aquest esdeveniment es va analitzar el potencial del cicloturisme i la dinamització del territori com a eixos de la promoció i impuls de les anomenades Vies Verdes, en la qual han participat, entre altres entitats, els Serveis Ferroviaris de Mallorca i la Fundación Ferrocarriles Españoles.

B. Més sobre el model turístic i l'impacte territorial: el PRI de la Platja de Palma

El Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma (PRI) ha rebut l'aprovació definitiva, i ha estat concebut com un instrument realista i consensuat, que ha de permetre la reconversió efectiva d'aquesta zona turística madura, qüestió que discuteixen alguns professionals.

Aquest PRI ha de permetre l'avanç d'aquesta zona cap a un destí modern, que serveixi perquè en els pròxims trenta o quaranta anys Palma continuï tenint la Platja de Palma com a referent, tant turísticament com econòmicament.

Cal recordar que el desenvolupament de la Platja de Palma no s'havia paralitzat, ja que l'aprovació de la Llei de turisme i el Decret llei de la Platja de Palma el 2012 van permetre que mentre s'aplicava el PRI ja hi havia un marc legislatiu que ha possibilitat la reforma integral de 50 establiments turístics d'allotjament, 30 augments de categoria i l'inici del reposicionament d'aquesta zona tot i que no ha provocat processos de reconversió d'espais públics o comunitaris.

Els promotors afirmen que amb l'aprovació definitiva d'aquest PRI s'entra en una nova etapa, en què es podran implantar més fàcilment hotels de cinc estrelles a la Platja de Palma, on fins ara no n'hi havia cap, i es possibilitaran noves inversions que no s'havien fet en les darreres dècades.

Comparativament s'ha de fer un darrer apunt, i és que mentre el PRI de 2010 apostava per grans obres públiques i adquisició de sòl mitjançant expropiació, el pla aprovat definitivament ara aposta per fer valdre els recursos existents, facilitar la inversió

privada i prioritzar la reconversió dels establiments. Dels espais públics, de la qualitat de l'entorn i del desenvolupament d'equipaments comunitaris, se'n diu ben poca cosa.

5.4. Sobre projectes de recuperació de fauna

Tancarem aquesta crònica amb unes notes breus al voltant de les polítiques de conservació de la fauna silvestre. D'una banda, destacarem els esforços que s'han dut a terme amb el Pla de Reintroducció de l'Àguila Cuabarrada a Mallorca, que ha permès l'alliberament de 24 exemplars des de l'any 2011, amb un èxit important.

D'altra banda, la col·laboració privada entre dues entitats com el COFIB i l'empresa que explota el Palma Aquarium, permet implantar accions de gestió en la recuperació de la fauna marina amb la posada en funcionament d'un centre de recuperació de fauna marina, que ha atès en un semestre 19 tortugues marines i 11 cetacis.